

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Exp. 05266-31-05-001-2021-00380-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por STAP ANTIOQUIA S.A.S ESP, frente al auto que decidió declarar impróspera la excepción previa de *“no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”* dentro del proceso ordinario laboral que les adelanta JUAN FELIPE GÓNZALEZ PEREZ.

**ANTECEDENTES:**

El demandante radicó el escrito inicial con el propósito de ser reintegrada al cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación con el correlativo reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales dejados de pagar, incluidos los aportes al sistema de salud, la indemnización de 180 días contemplada en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, la indexación y las costas del proceso.

Una vez notificada en debida forma el libelo, la parte opositora propuso como medio de defensa entre otros, la excepción previa de *“no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”*. Basó la excepción en que, de prosperar la pretensión de reintegro necesariamente debe procederse con el pago de aportes retroactivos, por lo que al ser Colpensiones quien habría de recibir dineros, para efectos de evitar su negativa y la posible imposición de la sanción prevista en el Decreto 1990 de 2016 se hace necesaria su intervención en el trámite.

En la audiencia del artículo 77 del CPTSS celebrada el 21 de septiembre de 2023, la *a quo*, comprendió que la excepción no estaba llamada a prosperar, en la medida que consideró que la presencia de la administradora que se pretende vincular no es imprescindible ni indispensable para decidir sobre el fondo del asunto, pues no tiene ninguna obligación frente al demandante y que en caso de una eventual condena solo se ordenaría la realización del cálculo actuarial y el recibo de los dineros por concepto de esos aportes, que no se puede negar a recibir como quiera que existiría una decisión judicial que así lo disponga, tratándose entonces de un trámite administrativo ante la entidad.

La parte propulsora de la excepción interpuso recurso de apelación aduciendo que si Colpensiones no hace parte del proceso, no es posible imponérsele la orden que se aduce en la decisión del despacho y si una de las pretensiones de la demanda es lograr el pago de unos aportes, la directamente vinculada sería Colpensiones, por lo que insiste en que sea integrada esta entidad por pasiva con la finalidad de no generar dilataciones injustificadas, ni someter a las partes a un proceso administrativo que se puede evitar con el proceso.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Pues bien, la figura del litisconsorcio necesario se encuentra prevista en el artículo 61 del CGP aplicable por remisión del 145 del CPT y la SS. Según esta disposición es necesaria la vinculación de las personas (naturales o jurídicas) cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin su comparecencia, por ser sujetos de tales relaciones o haber intervenido en dichos actos. La falta de integración del contradictorio de estos sujetos, genera la nulidad de la decisión de primer grado, pues así lo dispuso el legislador en el parágrafo 5° del artículo 134 del CGP, ya que naturalmente, si lo que se busca con esta figura, es que en el proceso se dé una solución uniforme al problema jurídico sometido a la jurisdicción para todos los que intervinieron en la relación jurídico-sustancial, la ausencia de alguno de estos, no permite la validez de la sentencia.

Así, para determinar si es necesaria la vinculación de un sujeto al trámite, debe analizarse en primer lugar, si el legislador lo dispuso de esta manera; y, en segundo lugar, si por la naturaleza del acto jurídico demandado, deviene en necesaria la presencia de quien se solicita sea llamado para definir de fondo la controversia.

En el asunto, atendiendo la naturaleza del trámite es claro y patente que lo que se busca es la procedencia de un reintegro desde el análisis de la prerrogativa de la estabilidad laboral reforzada, pretendiéndose atribuir a la persona jurídica convocada el reconocimiento del rubro indemnizatorio por ser fenecido el vínculo aun en condiciones de salud que están sujetas a la protección constitucional, además de los conceptos salariales y prestacionales derivados de la eventual reincorporación, junto con los aportes al Sistema de Seguridad Social de Pensiones, determinación que parte de una determinación y posible omisión en la que ninguna injerencia o participación tuvo Colpensiones, lo que explica que los pedimentos no incluyeran como destinatario a la administradora, no quedando duda que las pretensiones enlistadas por el recurrente de manera alguna generan un vínculo sustancial con la entidad que haga pensar en un litisconsorcio necesario, cuyo análisis de las circunstancias fácticas del escrito inicial conllevan a razonar que la sentencia en últimas no la perjudica ni la beneficia, ni su obligación que se halla limitada de forma exclusiva a recibir unos aportes supeditados a lo que se defina frente a quienes ya hacen parte de la litis, debe definirse de manera uniforme al punto central de lo traído al escenario judicial, ya que su sola calidad de administradora de los aportes de quien actúa como parte actora no la hace sujeto de la relación jurídica o de los actos respecto de los cuales gira la controversia, sino que al contrario, se refleja la posibilidad de fallar de mérito sin su comparecencia por no ser activa ni pasiva en el enlace discutido, a más que la obligación que se inserta en las pretensiones enlistadas por el apoderado de la alzada, opera en cabeza de la administradora por ministerio legal, siendo sin lugar a dudas el responsable patronal quien carga con el deber de pagar el correspondiente cálculo actuarial si hubiere lugar al mismo (Ver SL597-2022).

En este orden, siendo que ni la propia ley, ni la esencia de lo que es objeto de debate en esta oportunidad, establece como requisito indispensable la integración del contradictorio con quien funge como administradora de quien promueve la acción litigiosa para lograr la asunción de unos aportes pensionales a través del mecanismo del cálculo actuarial, es que se hace

viable adelantar el respectivo procedimiento como bien lo determinó la *a quo*, sin la presencia o intervención forzosa de Colpensiones.


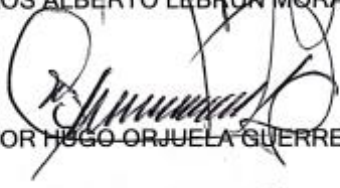
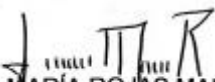
Sin necesidad de consideraciones adicionales, debe concluirse que el punto objeto de apelación debe confirmarse.

Las costas en esta instancia están igualmente a cargo de la parte demandada a quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$200.000.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto objeto de apelación de fecha y procedencia conocidas. Las costas en esta instancia son como quedó dicho en la parte motiva.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la decisión anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 1 fijados el 11 de enero de 2024  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.